

control del rendimiento presupuestario de las universidades, y no solamente de ese rendimiento presupuestario, sino en ocasiones de la utilización de esos recursos financieros en relación con la estructura de plantilla, etc.; esto es una cuestión que está de moda, que ha salido en el debate de la Ley y que alguna reflexiones de algunas comunidades han puesto muy sobre la mesa.

En definitiva, existe una necesidad de articular mecanismos de relación entre los órganos de gobierno de las universidades y las respectivas administraciones, a través de un sistema, que me parece más razonable, como es el de los contratos-programa, y que se pudieran así establecer una serie de recursos y una aplicación de esos recursos a determinados objetivos que estuvieran consensuados entre Administraciones y universidad, especialmente respecto a la financiación que reciben de las propias Administraciones públicas.

ALGUNAS NOVEDADES DE LA PRÓXIMA NORMATIVA LEGAL UNIVERSITARIA

D. Vicente Ortega Castro

Secretario General del Consejo de Universidades

He de decir, en primer lugar, que he leído el resumen de las propuestas de actuación formuladas por los ponentes que han intervenido anteriormente. He visto que hay temas que prácticamente afectan a la organización interna de las universidades, y hay otros, como los tratados por *Roberto Marco*, o *Antonio Pulido*, que caen dentro de la política de ordenación de las universidades, a los cuales me voy a referir.

Vamos a comenzar, en primer lugar, con el tema del *acceso*, ya que está ahora de moda lo relativo a la Selectividad, y que está relacionado con algunas de las cuestiones que se han mencionado aquí: autonomía, diversidad, flexibilidad, y diferenciación. La selección de los alumnos, ya en la Ley de reforma universitaria se decía que es competencia de las universidades, junto con las normas de permanencia y verificación de los conocimientos de dichos estudiantes. Pues bien, a diferencia de la permanencia y la verificación, la selección no ha sido realmente competencia de las universidades; y es que no se podía, la situación pasada era tal que requería de unos métodos para hacer frente a un crecimiento enorme de la demanda, y por lo tanto, había que establecer mecanismos que permitieran a las universidades hacer frente con unos recursos limitados a una enseñanza de calidad.

Hoy la situación permite devolver a las universidades su autonomía para que puedan seleccionar ellas a los estudiantes. Por otra parte, ¿cómo se va a hacer esta selección?. Por ahí se dice: “esto va a ser una prueba tremenda, las universidades van a hacer unas pruebas difícilísimas y horribles”. Más bien estamos presuponiendo la *culpabilidad* en lugar de la presunción de *inocencia*. Hay que ver lo que ocurre en países como los de la Unión Europea, donde existe el sistema de acceso a las universidades con una prueba de homologación al final del bachillerato -llámese como se quiera en cada país- y después el propio acceso a la universidad, para lo que son las universidades las que fijan las reglas. Reglas, por las que en el 80% de las universidades el acceso es directo; solamente existe un 20%, en las que hay exámenes, dependiendo del tipo de enseñanza (ciencias de la salud), o dependiendo de la estructura de estudios, como en ciertas ingenierías.

Lo normal es que, después de pasada la prueba de homologación del sistema de enseñanza secundaria, el acceso a la universidad puede ser prácticamente inmediato. Ahora la situación es distinta, antes el problema de las universidades era cómo rechazar a un estudiante, ahora el problema es cómo lo captan; ahora tendrán que hacer campañas de promoción para que vengan estudiantes a su

universidad, es todo un sistema de *distrito abierto*. Lo han cambiado y por lo tanto eso es bueno, a la larga se fomenta la competencia, se fomenta la diversidad. Una crítica que se señala es que “entonces, en las universidades, las va a ver buenas, malas y regulares”. Pues sí, eso está bien, nos tendremos que acostumbrar a que no todas se midan con el mismo nivel, sino que puede haber diversidad; con sus riesgos, evidentemente, pero todos los sistemas un poco más libres conllevan riesgos, pero creo que ello puede ser positivo.



D. Vicente Ortega Castro

La nueva Ley va a dar mucho que hablar sobre este tema. Creemos que puede mejorar la situación respecto a la que había ahora, ya que se va a promover la competencia de las universidades, y se va armonizar el sistema europeo, de acuerdo con la Declaración de Bolonia, de cara a remover los obstáculos que se oponen a la movilidad, y a España le ha costado un disgusto con los franceses, porque no cumplimos la Convención de Lisboa. Eso es lo relativo al acceso, y al aumento previsto de la autonomía de las universidades para seleccionar a sus alumnos.

Otro tema de los que también preocupan, y en el que va a haber novedades, es el del *gobierno* de las universidades. Al final en la autonomía reside el gobierno de las universidades. Aquí se contemplan nuevos sistemas. Desde luego lo que sí está claro es que sobre el gobierno no se va a llegar a ningún consenso. Desde el Consejo de Universidades veremos todas las posturas, y está claro que las Comunidades Autónomas legítimamente quieren tener más intervención en el gobierno de las universidades, a través de distintos mecanismos, y las universidades quieren tenerlo ellas, y sin la intervención de nadie de fuera.

Al final, el Parlamento tendrá que optar por un modelo o por otro. ¿Por cual modelo se ha optado inicialmente? Por una parte, se ha optado por dar más fuerza al Rector con su equipo, es decir, separar lo que son los mecanismos de representación, de lo que son los mecanismos de gobierno, de forma que el Rector con un sistema como el que está previsto, un sistema universal de elección ponderado, de acuerdo con las categorías de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicio, va a estar más legitimado. Existen riesgos, como siempre han existido, de que al ser algunas universidades muy grandes, puedan intervenir las grandes corporaciones, los partidos políticos, los sindicatos, etc.; pueden hacerlo, pero lo que se hace ahora también es lo mismo si bien en pequeños grupos. El Rector normalmente tiene que pactar antes de su elección con grupos de intereses, con grupos de profesores, con grupos de presión, con grupos sindicales, con grupos de alumnos, etc. De

esta forma pensamos que a través de este sistema, la responsabilidad de los electores es más abierta, y por ello, el Rector viene con una legitimidad fuerte; sale de una elección menos condicionada que actualmente.

En el gobierno universitario se prevee asimismo un *Consejo de Gobierno*; la idea es similar a la de un consejo de administración, en el que está primero el Rector, con su equipo de confianza, y está el Claustro con su representación, de hecho elige un tercio del Consejo de Gobierno; el Rector tiene otro tercio, y las Comunidades Autónomas a través del Consejo Social poseen el último tercio. Algunas Comunidades Autónomas ya han dicho que les parece muy poco, y querrían como mínimo el 49%, que es lo que parece que les permite el Tribunal Constitucional; este es un tema discutible. Algunos Rectores ya han dicho que eso les preocupa muchísimo, eso de tener gente *de fuera* metida *dentro*.

El Consejo Social va a poder controlar, cuando hasta ahora no hacía casi nada al respecto. Los papeles de la Junta de Gobierno, los miraba, si la gente era buena y educada, decían “está bien” y si había intereses políticos para que la cosa no funcionara, se armaba la de *San Quintín*. Era un sistema de control *a posteriori*, de no saber lo que pasaba, ahora se va a estar participando con un tercio, y el Rector tiene un tercio de su confianza y un tercio de la comunidad académica. Decía un Rector, creo que de Madrid, que habría que decir a los presidentes de los Consejos Sociales que fueran ellos a pelearse con el Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, en lugar de ser los rectores, cuando se habla de financiación. Pues probablemente, si se hubiera cumplido, una de las funciones del Consejo Social sería esa. Porque ahora no están cotidianamente, no pueden conocer con detalle los problemas de la universidad, no están inmersos, y al no conocer los problemas, difícilmente van a poder contribuir a solucionarlos. Yo lo veo más como un esquema de *participación* que como un problema de *confrontación*.

Por otra parte, está el Claustro; evidentemente con su representación estamental, ese Claustro tendría, entre otras funciones, la de elegir ese tercio de personas que según la normativa prevista le corresponderá en su Consejo de Gobierno. Luego están los órganos más habituales, como: el Consejo de Dirección, que el Rector nombra, las Juntas de las Facultades, etc.; eso ya es la organización interna de la propia universidad, como son estructuras por dentro, los estatutos de las universidades decidirán cómo lo hacen. En todo caso, tiene que convencerse todo el mundo, como dice el preámbulo de la actual Ley, que la Universidad “no es patrimonio de los universitarios”; hay que convencerse efectivamente de que no es un patrimonio de los universitarios, es patrimonio de la sociedad.

En ese sentido, se abre un camino nuevo, que puede mejorar las experiencias actuales, en las cuales las tomas de decisiones son muy lentas, es muy difícil gobernar, etc. En cuanto a la pregunta: ¿Se va a politizar la elección a Rector?, ¿Es que el Rector no es un cargo político?. Pues sí, el Rector y su equipo tienen que hacer política universitaria. Pero para eso hay que darles mecanismos para que puedan hacerla, y para que puedan gobernar, y se va a aumentar la capacidad de gobierno de las universidades mediante una participación en el gobierno de la propia sociedad y de las Comunidades Autónomas, con sus leyes de consejos sociales, y la determinación del perfil y los tipos de personas que participarán en ese consejo de gobierno. Con lo cual de alguna manera, se adapta el papel de los Consejos Sociales.

Otro de los temas importantes es el profesorado. Voy a referirme a algunas innovaciones que se introducen. Había una acusación exagerada, si bien algo de fundamento tenía, sobre el profesorado funcionario y la *endogamia*. Lo que sí es cierto, es que en el sistema actual, tenía excesiva influencia el departamento, que lógicamente tiende a apoyar a sus miembros; es lógico que un maestro apoye a sus profesores y estudiantes y becarios, desde el punto de vista interno; desde el punto de vista externo, en cambio, se aprecia una influencia excesiva del Departamento, y poca del gobierno de la universidad; prácticamente las promociones venían dadas casi siempre en función de la política de departamento; ¿se puede hacer así política de universidad?; pues no.

Ahora, con el nuevo sistema, se deja el profesorado funcionario como una competencia del Estado, y la estructura del profesorado va a estar basada en el profesorado *contratado* y el profesorado *funcionario*, como ahora. La diferencia está en que la LRU marcaba un esquema en el que el 70% era funcionario, 30% contratado, y ahora se permite a las universidades que puedan tener un 51% de funcionario, y hasta un 49% contratado. En principio, se va a optar por que haya una base de profesorado permanente de la universidad, y en la que reside fundamentalmente su autonomía, la autonomía de las cosas importantes, como son la libertad de cátedra y la libertad de investigación y la libertad de estudio; se trata de una capacidad de independencia del profesor, y por eso tiene que haber esa base y esa estabilidad que asegura fundamentalmente la autonomía de la universidad frente a los simples devaneos políticos, modas o influencias o historias. Luego, la universidad que lo desee, puede elegir un modelo que refuerce mucho más lo contractual, hasta llegar al 49%; en la parte contractual se deja un amplio margen de regulación a las Comunidades Autónomas.

Se introduce así un cierto equilibrio entre lo que puede ser la base *permanente*, que es difícil de cambiar, y por lo tanto, es difícil que se adapte a situaciones cambiantes, y lo que es la base *contractual*, que es más fácil en definitiva de adaptar a situaciones cambiantes.

Otro tema interesante, que es una novedad en la nueva Ley, es la creación de una *entidad de acreditación*. Es un *paso de tuerca* más respecto a lo que ya se ha hecho, aprovechando la experiencia de los Planes de evaluación, más bien centrados en los programas de autoevaluación de las propias universidades. Va a llegar el momento de crear también una Agencia, siguiendo también la tendencia europea; aquí no nos inventamos nada, de hecho una de las declaraciones de Bolonia establece que hay que ir a una agencia de acreditación europea, que acredite a las agencias nacionales, y a su vez las nacionales acrediten a las de las CC.AA.

Es un mecanismo que se pone en marcha para evaluar enseñanzas, para evaluar profesores, para evaluar programas especiales que pueda financiar el Ministerio, o las comunidades autónomas; se introducen los conceptos de evaluación también para evaluar la posible promoción; todo esto ¿para qué?: por una parte, para dar información a las Administraciones públicas de esa parte de los rendimientos, de esa parte de rendición de cuentas, y en función de eso, poder aplicar una política de financiación, o bien para aplicar programas especiales de financiación, programas doctorales de calidad, programas de becas, etc. basados en esquemas de evaluación, y también para seguir en cierta medida con la evaluación de la investigación de personas, como es el caso de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, y quizá introducir desde fuera mecanismos para mejorar la evaluación docente del profesorado; en lo referente a otro mecanismos de evaluación de la investigación, éstos ya no dependen del Ministerio de Educación, sino de otro Ministerio.

Hemos tratado de dar un paso más, por otra parte, con el II Plan de Evaluación de la Calidad, que salió hace poco en el Boletín Oficial, para ir ya midiendo cosas varias, lo cual produce un cierto miedo. Cuando se pasa del campo de lo conceptual, a medir con un catálogo concreto de indicadores, empieza a haber unos temores tremendos, y se empieza a decir que hemos de abordarlo con prudencia; pero es necesario medir, hay que pasar de las *musas* al *teatro*, poco a poco y con prudencia, pero creo que a la larga puede ser una cosa interesante.

Otro tema que preocupa es el tema de las *Titulaciones*: qué esquema va a haber, si se va a cambiar. No, de momento lo único que hace la Ley es dejar el tema abierto. Sobre el tema de la estructura de las titulaciones hay una discusión muy fuerte en toda Europa, es un tema complicado, porque hay tradiciones, porque hay esquemas en cada país distintos, en ámbitos como la Medicina y Ciencias de la Salud, e incluso en las Ingenierías, que afectan más que otras enseñanzas; creo que va a tardar todavía 2 ó 3 años en articularse, para ir viendo mientras cómo y por dónde se camina en la Unión Europea; no me parecía oportuno plantear que nosotros nos inventemos un sistema antes de ir viendo el sistema europeo; después se podrá ir haciendo una reestructuración de titulaciones y de ciclos, para armonizarlas y converger con ese sistema europeo de enseñanza superior.

En lo relativo al *acceso*, o la promoción del profesorado, se cambia el sistema de concurso por el de habilitaciones nacionales, con lo cual también en cierta medida se refuerza la autonomía universitaria; la planificación de su plantilla la hace cada universidad. La universidad solicita las plazas que quiere que salgan a concurso por áreas de conocimiento, y se pueden dotar un máximo tanto de titulares como de catedráticos, y en estas plazas habrá unos concursos con unos tribunales de 7 miembros; son una pruebas parecidas a las que hay ahora, introduciendo en el caso de los titulares - es la primera vez que se hace-, una prueba más, además del currículum, del proyecto de investigación y del proyecto docente, por la que explique una lección del programa que presente; una prueba sencilla, pero que en ocasiones puede entrañar una cierta dificultad para aquellos que no tienen ninguna experiencia docente.

En función del sistema de habilitaciones, saldrán las plazas, y no podrán salir más de las que se han pedido, a fin de evitar que pudieran superar la prueba todos los presentados, sólo tienen que superarlas el número de candidatos idéntico a las plazas solicitadas por la Comunidad dentro de su área de conocimiento, y después de entre esta gente y de entre la gente que ya está en las universidades con la categoría similar, las universidades seleccionan, eligen, contratan como quieran, como decidan ellas mismas, entre el conjunto de habilitados y el conjunto de profesores que ya existen en las universidades, y que podrán acceder a los concursos si están ya habilitados, sean titulares o catedráticos.

El sistema no está exento de algunos inconvenientes, pero yo creo que se respeta la autonomía de la universidad en el sentido de que ella selecciona, y al menos el sistema garantiza una calidad mínima en la selección del profesorado; evita los casos de endogamia *mala*, que era lo que podía ocurrir ahora. Luego veremos si el sistema funciona bien, y hay que esperar que funcione bien; al menos evita los casos -que algunos hay- debidos a la situación actual, y aumenta también la competencia en el área de conocimiento, dado que todos conocemos como, en los concursos actuales, muchos conocen ya la *situación*, y se abstienen de presentarse. Pensamos que en este sistema también se fomentará la competencia para ser profesor habilitado.

Jesús Lizcano: Según parece, se ha previsto una *habilitación nacional*, tanto para los alumnos, como para los profesores: Por una parte, los estudiantes tendrán que hacer una especie de prueba nacional de reválida, y luego las universidades intentarán captar a los alumnos mediante sus sistemas de selección; por otra parte, habrá una habilitación nacional también para los profesores, quienes tendrán que obtener primero esta habilitación, y después entre los habilitados, las universidades captarán o seleccionarán los candidatos. Mi primera pregunta es: Después de la prueba de reválida en el primer sistema de habilitación, el de los alumnos: ¿Se tiene previsto un sistema homogéneo y común a todas las Facultades de una universidad, o dentro de eso, cada universidad podrá utilizar, en distintas Facultades, diferentes formas de selección? ¿Van a tener autonomía para esto?. Otra cuestión: Respecto a la habilitación de los profesores, me gustaría saber si se va a hacer por áreas de conocimiento similares a las áreas que hay ahora, o bien tienen pensado modificar las áreas de conocimiento?. Y por otra parte, me gustaría saber si la habilitación que está prevista ¿va a tener una caducidad, es decir, le va a durar al profesor un año, dos años, tres años, o será para siempre?

Un asistente de la Universidad Politécnica de Madrid: En el acto de hoy, se ha aludido a que la universidad cumple una función investigadora, pero también docente; se ha dicho que el Proyecto de ley se presentaba con un claro apoyo a la investigación, pero ¿dónde está el apoyo a la docencia? Necesitamos que la nueva ley dé un claro apoyo a la docencia, y que se plantee una carrera docente y se planteen también las funciones acordes con la función que se hace en la universidad. Yo creo que la función docente debería entenderse como una alta profesión y no como se ha dicho aquí esta mañana, como una profesión vocacional nada más, que muchas veces se plantea sujeta a complementos retributivos sujetos a evaluación. Yo no entendería que para un médico sus complementos retributivos estuviesen sujetos a la opinión de sus pacientes; tampoco entendería que la retribución estuviera sujeta

a la opinión de sus administradores. En cuanto a la estructura, ya nos ha aclarado que no se piensa plantear un cambio estructural dentro de la nueva ley, que se va a dejar abierto. Sin embargo, me parece que también es un compromiso que había adquirido este país con otros. ¿Qué dirá España cuando llegue a Praga en cuanto al cambio estructural? ¿Qué ha hecho España?

Cyntia Rodríguez, Psicóloga de la Escuela de Formación de Maestros: Me gustaría saber en relación con la habilitación nacional prevista, en qué punto se parece al sistema francés, en qué punto se parece a algún otro sistema, me parece que el alemán es también similar. Hasta donde yo conozco, en la Tesis de Estado, en Francia, el tipo de exámenes, que me parece bastante razonable, no es de un tema genérico, o de un área genérica, sino allí se examina de la trayectoria profesional e individual de un investigador, que es un gran experto en un determinado área. Yo creo que nuestro país está necesitado de ese tipo de profesionales, sin menoscabar la intervención de la profesora Elena Escudero, que me pareció preciosa. No voy en contra de esta opinión, pero mi idea va encaminada a lo que se hace en otros países, el tema de qué se va a preguntar en esa habilitación en relación con lo que justamente nos está faltando, que es sobre todo competencia investigadora, y que me parece que es una enorme carencia que tenemos comparándonos con otros países.

Angel Ponce (Universidad Politécnica de Madrid): Mi primera cuestión sería una aclaración en cuanto al tercio del Consejo de Dirección que se elige por el Consejo Social; me ha parecido oír algo distinto a lo que se recogía en los papeles que se dieron en la rueda de prensa de la Ministra, en los que aparece que esa tercera parte, sería de extracción del Consejo Social en la parte no académica; eso es lo que pone en el texto, pero me ha parecido que ha dicho otra cosa, y por eso preguntaba.

La siguiente cuestión es relativa al profesorado contratado, sobre el tipo de contratación. ¿Tienen claro si va seguir siendo *administrativa*, o va a pasar a ser una contratación *laboral*?. Y tercero: Se ha hablado de las titulaciones, pero en cuanto a la estructura de los centros (existen facultades, existen escuelas técnicas superiores y existen escuelas universitarias) ¿se va a cambiar esto en algo?.

Héctor Grad (UAM): Quería primero agradecer la explicaciones y aclaraciones que ha dado D. Vicente Ortega sobre la Propuesta del Documento de la nueva Ley, y desearía hacerle dos preguntas o dos aclaraciones. Una es sobre las modificaciones del sistema de Gobierno de la universidad. No tengo claro de qué manera cambia el sistema actual. Toda la discusión está centrada en el sistema de elección del Rector, o de la composición de la Junta de Gobierno, que pueden influir o pueden mejorar la capacidad real del gobierno que tienen los equipos de gobierno de las universidades hoy en día, y cambiar a la vez la estructura departamental y las competencias que tienen los departamentos, y el régimen funcional del profesorado, que son las dos limitaciones. Faltaría quizá, el tema presupuestario, para completar las limitaciones que hacen que el grado de libertad de cualquier equipo del gobierno sea bastante pequeño en cualquier sentido. La pregunta, en síntesis, sería ¿De qué manera el cambio en el sistema de elección puede garantizar que haya realmente una mejor política de dirección de las universidades?.

La segunda pregunta es relativa al tema de la selección de profesorado. Creo que la discusión se centra bastante en el procedimiento de selección, y no en cuáles son los fines de la selección. En la ronda anterior de las intervenciones, salió el tema de que uno de los problemas básicos es la falta de responsabilidad de los que toman la decisión de la elección sobre los resultados o las consecuencias de su elección, ya sea que los veamos como rendición de cuentas, ya sea que lo veamos como consecuencias para los colectivos que toman la decisión. Otra vez la propuesta no dice nada al respecto, y en cambio se centra en cuestiones que en el fondo quizá terminen dando un resultado bastante aproximado o bastante cercano al registrado en el sistema actual, debido a los colectivos académicos, a las relaciones de poder a nivel de Estado en muchos tribunales de habilitación. Cabría preguntarse si se va a obligar a las universidades a tener que acoger al grupo habilitado en su totalidad, porque puede haber un caso complementario, que antes proponía Roberto, y es que una universidad

decida que ninguno de esos candidatos habilitados le viene bien, y por ello lo deja vacante, con lo cual seguiríamos con la misma endogamia que hay hoy día.

Pregunta de un asistente: He visto el discurso literal de la Ministra ante el Consejo de Rectores y habla de niveles de profesorado. ¿Va a ver más niveles de los actuales: Profesor Titular y Catedrático?. Y ¿qué pasa con las universidades privadas en la nueva Ley?; no he visto ninguna referencia, ni tan siquiera al control del profesorado, sea en la universidad pública o en la universidad privada; ¿se conoce si va a haber alguna referencia a esto?

Carmen Vizcarro: Mi pregunta tiene que ver con un comentario que hizo Vicente Ortega en relación con la selección de alumnos; comentaba que las universidades van a tener que plantearse cómo captar a los estudiantes, y por lo tanto la posibilidad de que hagan campañas; en una buena campaña puede buscarse la calidad de la docencia, seguramente. La verdad que a mí me alegra saber que en las pruebas de habilitación se contempla una prueba docente, y eso se corresponde con el perfil, con lo que van a tener que hacer aquí; inmediatamente me surge la pregunta de si la prueba va a consistir únicamente en una exposición y, por lo tanto, basada en un método de enseñanza totalmente tradicional; entonces no sé yo si van a cambiar mucho las cosas.

Una asistente de la Facultad de Medicina de la UAM: Algunas universidades ya han elaborado unos documentos de evaluación de la actividad docente, incluso están ya aprobados; es más, algunas están desarrollando documentos de evaluación de la actividad investigadora; ¿cómo es ésto compatible, qué papel va a tener ésto a efecto del papel de la acreditación, si se van a tomar para usos internos o si van a contar con ellos a la hora de evaluar al candidato?

Ildefonso Bonilla (Biológicas de la UAM): Creo que las pruebas de selección de los alumnos hace muchos años ya que no son tales, prueba de ello es que el 80% las superan. Es un tema de ordenación de ofertas y demandas. Evidentemente no es lo mismo la problemática, en esta misma universidad, de las Matemáticas, donde, por ejemplo, la oferta en absoluto se cubre, y el caso de las Ciencias Ambientales, donde solamente podemos ofertar ciento cincuenta plazas, y no nos llegan muchas menos de mil solicitudes. No quisiera creer que vamos a volver a alguna situación pasada, en la cual por ejemplo, recuerdo cómo un redactor jefe del Diario *Ya* perdió el puesto porque introdujo un artículo en la sección de Ciencia que se titulaba “Los genes de los médicos son todos dominantes, porque los hijos terminan siendo médicos”. Evidentemente en función de cómo se hagan las pruebas de Selectividad habrá más o menos alumnos, con independencia de la curva demográfica, sea la que sea.

La otra pregunta se refiere a que ya hay un proyecto muy concreto encima de la mesa, y se sabe que tiene que ver con el tema de la reforma universitaria; evidentemente no deja de ser un proyecto, y lógicamente tendrá al menos un tiempo de debate, pero el programa Ramón y Cajal, que ya está firmado, es un punto verdaderamente simbólico, como ya he comentado antes, de la iteración del Ministerio, de las universidades y del Consejo. Esos profesores que llegan aquí, no menos de ochocientos, según parece y que van ser captados por la universidad e incluso parece ser que se les dará una responsabilidad progresiva, con una dirección de proyecto de investigación, por un millón de pesetas. Evidentemente en el campo de las Ciencias esta cantidad resulta ridícula y evidentemente estamos frente al problema eterno de la investigación. Debemos abrir nuevos campos de investigación que la sociedad y el sentido común están demandando, y de alguna forma habremos de integrar de forma más inteligente a esas personas que son válidas y que traen nuevas tecnologías, y que deberían integrarse en los grandes equipos que ya están configurados y le dan solidez.

Pilar Arroyo (Escuela de Enfermería de Puerta de Hierro): Me parecido entender al Sr. Ortega en esta exposición que ha hecho sobre la futura nueva Ley, en lo referente a las titulaciones, que en aquellas que tienen que ver con el sector de Ciencias de la Salud, no iba a ver ninguna modificación de momento al respecto. Mi pregunta por lo tanto es, ¿quiere decir que esa Licenciatura,

de sólo segundo ciclo, que parece ser que estaba ya inminentemente preparada sobre Ciencias de la Salud o similar, va a quedar definitivamente de momento sin ver la luz, o por el contrario no tiene nada que ver al respecto la entrada en vigor de la Ley?.

Respuestas de D. Vicente Ortega a las anteriores preguntas:

En cuanto a la primera cuestión, relativa a la Reválida y a la Selectividad, lo que es seguro es que cada universidad hará su prueba de acceso. ¿Cómo la harán los centros en cada universidad? ¿Unos la harán muy fuerte, otros la harán muy débil?. Es una responsabilidad de cada universidad. Cada uno tiene que aceptar su papel. A mí decían algunos: “ésto puede ser entonces ser un coladero”; puede ser precisamente lo contrario, a veces el profesorado es excesivamente exigente. En cualquier caso, puede haber gente que por las razones que fuere..., pero ahí está el Gobierno de la universidad; y no sólo el de la universidad, sino también el de la Junta de las comunidades, que pueden llegar a acuerdos con las universidades; ello dependerá, en definitiva, de cada una universidad; en unas tendrán unas pruebas *normales*, en otras las harán muy duras, en otras simplemente evaluarán los currículums, etc.; depende de cómo lo organice cada universidad.

Después se ha preguntado sobre las Áreas del conocimiento. Evidentemente, va a haber que remodelar las actuales; para hacer el sistema de habilitación por áreas, hay que hacer un estudio de las actuales, y de ahí que las áreas puedan llegar a experimentar una remodelación importante.

Se ha preguntado por la *caducidad* de la habilitación. En principio, la universidad no tiene por qué aceptar a un candidato, en virtud de su autonomía, ya que si no se convertiría en una colocación de habilitados; entonces, si de los habilitados ninguno le satisface, no cogerá ninguno e incluso podrá coger de otra universidad, con lo cual sería la otra universidad la que tendría la vacante, a la que podría ir el habilitado. Incluso el habilitado puede no querer ir a esa universidad, pueden darse las dos situaciones. En principio el habilitado y la universidad tienen libertad, dentro de un orden. Porque ahora mismo cuando hay un concurso y sale un candidato que no es de la universidad, la universidad *se lo traga*. Sin llegar aquí a eso, habrá que instaurar algún sistema en que de alguna manera las universidades no puedan estar diciendo *no* continuamente, habiendo habilitados de calidad; y a los habilitados también habrá que decirles: *Oiga, usted tiene que concursar, no puede estar toda la vida esperando a ver si sale la plaza que yo quiero*. Eso está por estudiar, y probablemente formará parte del reglamento.

En cuanto a las funciones de la universidad, si investigación o docencia, yo creo que ésto no debe discutirse, creo que están bastante claras, por lo menos para mí, y deberían de estar para todo el mundo. Desde el texto relativo a la misión de la universidad, y el artículo 1 de la LRU, y después de la experiencias creo que deben estar claras. La docencia, la investigación, la transmisión de conocimientos, la extensión de la cultura, el apoyo a su comunidad y a la comunidad nacional. Toda institución tiene que buscar el equilibrio. La formación de profesionales, la formación de investigadores, todas tienen que buscar el equilibrio. Lo que está claro, es que el profesor universitario por excelencia tiene que tener las dos funciones: la enseñanza, y la investigación. Lo cual no quiere decir que no haya investigadores en la universidad y que puede haber también profesores lectores, pero el núcleo, la base de la universidad tiene que ser el profesor que hace las dos cosas a la vez. Eso es lo que diferencia a la universidad de una institución de enseñanza superior, o de un centro de investigación. En la ley ya se contempla, porque de hecho el 80% de la ley está hecha en función de la enseñanza, sólo un 20% depende de la investigación. Entre otras cosas porque la investigación ya no es competencia del Ministerio de Educación, nos guste o no nos guste. Tenemos que centrarnos en lo que son nuestras competencias, el sistema de titulaciones, el sistema de profesorado, todo eso es fundamentalmente de la administración docente.

Respecto al régimen retributivo, reconociendo que la retribución básica debería ser probablemente mayor, lo que sí está claro, y debe haber un cierto equilibrio o desequilibrio, como se

quiera, es que el 70% de la retribución básica debe ser digna, si bien debe hacer una parte a modo de incentivo; este sistema ha funcionado y funciona, el incentivo puede ser en función de rendimientos personales o institucionales, según los casos. Es bueno lo que se ha hecho, la próxima ley probablemente recogerá la experiencia de las comunidades autónomas, entre ellas Madrid; probablemente ya se legalicen lo que hasta ahora no se sabía si era legal o no, que es que cada comunidad autónoma en su programa de financiación puede establecer incentivos propios, aparte de los del Estado, y los que puedan las propias universidades.

Respecto a la semejanza de la habilitación con otros sistemas, quizá sea más parecido al alemán, parecido pero no es ni uno ni otro, no hay un sistema estrictamente igual. La Tesis de Estado de Francia, es una tesis vieja, y está en desuso, es un sistema antiguo, había dos tipos de tesis: la Tesis que llaman del Tercer Ciclo o algo así, o la Tesis de Estado, que ya es una cosa mayor y que habilitaba a los profesores a nivel nacional, o habilitaba la puerta de entrada. No se trata de eso, se trata de una prueba parecida a la que hay ahora, solo que la prueba que hay ahora, el concurso oposición, en lugar de hacerlo a petición del departamento, de la universidad, con dos profesores que pone la universidad y con un perfil determinado, etc., se va a hacer por áreas de conocimiento, con siete profesores nombrados todos por sorteo y con una prueba más, que es una prueba en la que el candidato debe demostrar que conoce el programa, dentro de las materias que puedan integrar ese área de conocimiento. Se trata además de que su trayectoria investigadora pueda diferenciarle de los demás candidatos, que demuestre que ha enseñado un programa, de hecho una persona que lo ha enseñado a lo largo de tres años forzosamente lo sabe, esa es la diferencia quizá fundamental respecto al concurso actual, lo demás es parecido.

En cuanto a lo que se ha preguntado sobre si contrato *laboral* o *administrativo*, eso depende del Ministerio de Administraciones Públicas, y por lo tanto yo ahí me pierdo ¿puede ser *laboral*, no se puede?, hay criterios que dicen que sí, y hay criterios que dicen que no, que debe ser *administrativo*. Todo lo tendrán que resolver en algún momento; algunos administrativistas dicen que es imposible que en los organismos públicos pueda haber contratos laborales, cuando parece que hay personas que tienen contratos laborales; yo me pierdo, ahí no puedo contestarle.

Sobre la estructura de las titulaciones, ésta no se va a cambiar, ni la de las titulaciones, ni la de los centros. Sigue habiendo Facultades, Escuelas universitarias, Escuelas superiores; siguen estando igual, porque no se cambian las titulaciones, y por tanto, tampoco la estructura. Y en cuanto a lo relativo a la titulación de Ciencias de la Salud, cuando hemos dicho que todo sigue igual, quiero decir que sigue igual lo que estamos haciendo; sobre esta titulación de Ciencias de la Salud está muy avanzada ya la propuesta para el segundo ciclo de esa licenciatura, y va a seguir adelante lo que estamos haciendo.

En lo relativo al sistema de gobierno departamental, el sistema departamental se va a dejar a la organización interna de cada universidad; ahí también se le dice a cada universidad que se organice internamente como quiera, se refuerza, eso sí. Esa ambigüedad que había en la actualidad entre centro y departamentos, facultad y departamentos, en lo que es la organización de las enseñanzas conducentes a títulos oficiales, aquí queda claramente en manos de la Facultad. El Departamento es una unidad de organización de las enseñanzas, es un área de organización. La universidad se organizará como desee, por departamentos, dentro de una norma reglamentaria que se establecerá al efecto, de manera que haya más flexibilidad que ahora, porque ahora existe cierta rigidez legal que crea problemas de que algunos departamentos se llamen igual que un área; de manera que no pueda decir un profesor de Matemática Aplicada que él no puede dar en el área de conocimiento de Matemática Aplicada, porque hay otro departamento que es el de Análisis Matemático, pues parece que son dos mundos distintos, cuando la experiencia demuestra en los planes de estudio que la Matemáticas Aplicada y el Análisis Matemático coinciden en todas las troncales en un 90%.

Ahí también las universidades dentro de unas normas amplias, tendrán también que ver con su autonomía cómo organizan sus estructuras departamentales. Pero lo que se pretende aquí es que el profesorado sea también más flexible, que no se encajone y pueda decir “yo estoy aquí amparado en mi departamento”. Hay que buscar sistemas mucho más flexibles.

Sobre la pregunta de los *niveles* de profesorado previstos, en cuanto a *funcionarios*, van a seguir siendo los actuales; en cuanto a *contratados*, parecidos pero con distintos nombres. Lo que se hace es introducir la figura del contratado que puede ser profesor, puede ser profesor investigador, y puede ser investigador. Puede haber profesores contratados que dependiendo de las circunstancias, puedan tener mayoritariamente funciones docentes, mayoritariamente funciones casi únicamente de investigación, o bien mezcladas. Dependerá de las Comunidades autónomas y sobre todo de la universidad en base al perfil que le interese.

Con respecto al Plan de evaluación, se han fomentado los grupos de expertos, y hay muchas unidades de evaluación que tienen sus guías de evaluación docentes, guías de investigación, por ejemplo, guías para la evaluación en Medicina, en Ciencias de la Salud, etc. todo esto se está haciendo y se continuará haciendo. Ahí se está creando un caldo de cultura y unos expertos de cara a esa nueva Agencia de acreditación, como hacemos ahora en el Consejo mediante la creación de comités, y de ahí sacar las vías para establecer los métodos de estandarización, métodos de homologación, y los métodos de indicadores. Evidentemente, se recoge todo lo que se hace desde las universidades, y por otra de los expertos, y todo eso conducirá a un tipo de normativa o vías de selección.

Respecto a la oferta y demanda, que preguntaba Ildelfonso, lo que suceda va a depender un poco de cada universidad; hay que dejarlas autonomía; si aquí, en la U.A.M. en Matemáticas hay una situación, y en Ciencias Ambientales otra, debe ser la universidad la que decida qué hacer con la oferta de Matemáticas y de Ciencias Ambientales. No puede decir el Gobierno lo que tiene hacer la Universidad Autónoma en Matemáticas o en Ciencias Ambientales, eso va implícito en la autonomía de cada universidad.

Lo único que hará el Estado, en todo caso, será tratar de regular para garantizar los principios de igualdad y de capacidad de los estudiantes. Para evitar posibles excesos, puede que sean pocos, de posibles denuncias, de casos que pudieran producirse. Tendrá que ser un proceso transparente y público, como se hace ahora. Eso no va a cambiar. Si un alumno con una nota no ha entrado en una universidad, y ha entrado otro con una nota menor, podrá denunciar el hecho, no sólo ante ese organismo estatal que pudiera haber, o contra el propio Consejo, sino ante un Juzgado. Cosas de éstas puede haber, pero yo confío en el buen hacer de las universidades.

CONCLUSIONES: PROPUESTAS CONJUNTAS DE MEJORA PARA LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

Se recogen a continuación un conjunto de propuestas de actuación formuladas por los ponentes del Seminario-debate multidisciplinar sobre: “La Universidad del Siglo XXI: Aspectos a mejorar”.

El planteamiento inherente a estas propuestas es que la propia autocrítica universitaria y la adopción de una estrategia proactiva y no meramente reactiva, no debe identificarse con una valoración negativa generalizada, desmoralizante y paralizante de la Universidad actual, sino como una prueba más de su dinamismo y capacidad de servicio a la sociedad. En ese sentido se formulan, en primer